

BOGOTÁ D.C. Y WASHINGTON, D. C. | OCTUBRE DE 2026

Una Colombia más fuerte puede contribuir a contrarrestar la creciente inseguridad y violencia criminal en el hemisferio

Alianza de cooperación:
Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP).
La International Coalition Against Illicit Economies (ICAIE).

David M. Luna
Director ejecutivo de ICAIE

Dirección ejecutiva
Carlos Augusto Chacón Monsalve

PRESENTACIÓN

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) publica este documento de David M. Luna en el marco de la alianza de cooperación entre la *International Coalition Against Illicit Economies (ICAIE)* y el ICP, orientada a fortalecer el análisis y la formulación de propuestas frente al crimen organizado transnacional, las economías ilícitas y las nuevas amenazas a la seguridad en Colombia y el hemisferio.

El documento, *A Stronger Colombia Can Help to Counter Growing Hemispheric Insecurity and Criminal Violence*, ofrece una perspectiva particularmente relevante para comprender la transformación del entorno de seguridad regional. Su principal contribución consiste en superar la lectura fragmentada de las diferentes economías ilícitas y organizaciones criminales para analizarlas como parte de un mismo ecosistema de convergencia criminal. El narcotráfico, la extracción ilícita de oro, el contrabando, el tráfico de armas y la trata de personas, la falsificación, el

lavado de activos y otras actividades ilícitas no operan necesariamente como mercados independientes. Cada vez con mayor frecuencia comparten rutas, infraestructura logística, facilitadores, mecanismos financieros, redes de corrupción y vulnerabilidades institucionales.

Esta perspectiva coincide directamente con uno de los planteamientos que el Policy Lab en Seguridad y Defensa del ICP ha venido promoviendo. Las estructuras criminales contemporáneas deben ser entendidas como redes adaptativas, capaces de diversificar sus fuentes de financiación, sustituir rápidamente los nodos que pierden, modificar sus rutas, penetrar actividades económicas legales y aprovechar las fallas de coordinación del Estado. Por esa razón, enfrentar individualmente organizaciones, cabecillas o rentas ilícitas puede producir resultados operacionales importantes, pero difícilmente altera de manera permanente el funcionamiento del sistema criminal.

El análisis de Luna muestra por qué el objetivo estratégico debe ir más allá de aumentar las incautaciones o capturas. La prioridad debe ser reducir sistemáticamente el poder de las redes criminales, afectando simultáneamente sus finanzas, infraestructura, logística, corredores, facilitadores, mecanismos de corrupción y espacios de control territorial. Esto exige pasar de una aproximación centrada principalmente en combatir delitos individuales a una estrategia dirigida a desmantelar redes y cadenas de valor criminales.

En nuestra propuesta L3P, *una hoja de ruta programática para liberar el potencial de las personas y del país*, en la ruta de seguridad hemos planteado la necesidad de recuperar la iniciativa estratégica del Estado, fortalecer las capacidades de inteligencia, anticipación y respuesta, y mejorar la coordinación entre las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía y las autoridades territoriales. Esto supone avanzar hacia una arquitectura de seguridad interoperable, con capacidades tecnológicas modernas, inteligencia estratégica, criminal y financiera, y operaciones orientadas a desarticular las redes de mando, financiación, logística y apoyo que sostienen a las organizaciones criminales.

El documento también introduce una dimensión esencial. La seguridad de Colombia no puede analizarse exclusivamente dentro de sus fronteras. Las organizaciones criminales operan a través de corredores regionales, utilizan puertos, fronteras, sistemas financieros y cadenas logísticas de varios países, y desarrollan alianzas con organizaciones latinoamericanas y extrarregionales. Colombia se encuentra, por tanto, en la intersección de buena parte de estos flujos, al tiempo que cuenta con una experiencia institucional, operacional y de cooperación internacional que puede convertirla nuevamente en un actor decisivo para la seguridad hemisférica.

De allí la importancia que Luna atribuye al intercambio de inteligencia, las investigaciones coordinadas, la inteligencia financiera, la recuperación de

activos y las operaciones conjuntas. La cooperación internacional debe producir resultados operacionales concretos contra redes, corredores y estructuras financieras transnacionales. Desde el ICP hemos sostenido igualmente que la cooperación hemisférica debe fortalecer la capacidad de adaptación del Estado frente a organizaciones que actúan a través de fronteras institucionales y nacionales.

Otro aporte fundamental del documento es la relación que establece entre seguridad, instituciones y mercados. Las economías ilícitas financian organizaciones violentas, generan corrupción, capturan instituciones, penetran actividades económicas legales y erosionan la competencia y la inversión. Cuando estas redes logran controlar territorios, puertos, cadenas logísticas, gobiernos locales o sectores económicos, representan una amenaza para el Estado de derecho, la democracia liberal y la libertad económica.

Esta perspectiva también guarda relación con nuestras *recomendaciones para la defensa nacional, la seguridad humana y la construcción de paz*, que contemplan una mayor articulación entre los niveles nacional y territorial, el fortalecimiento de las capacidades locales de información e inteligencia y una presencia estatal sostenida en los territorios afectados por las economías criminales. La recuperación del control territorial debe estar acompañada de una justicia eficaz, instituciones capaces de hacer cumplir la ley y mecanismos que impidan la recomposición de las estructuras criminales.

Finalmente, el documento refuerza una idea particularmente relevante para Colombia. El país no parte de cero. La experiencia acumulada durante décadas de lucha contra carteles, organizaciones terroristas y redes de narcotráfico constituye un activo estratégico. Las amenazas actuales, sin embargo, son más descentralizadas, tecnológicas, transnacionales y financieramente sofisticadas. El objetivo es adaptar los principales aprendizajes de esa experiencia al nuevo entorno estratégico.

En ese sentido, el trabajo de David Luna refuerza una discusión que desde el Policy Lab en Seguridad y Defensa del ICP consideramos indispensable. Colombia necesita pasar de administrar manifestaciones individuales de inseguridad a construir capacidades estatales para comprender, anticipar, disuadir y desarticular sistemas criminales complejos.

La seguridad debe permitir que las personas vivan libres de violencia y de miedo, que el Estado ejerza efectivamente su autoridad legítima en todo el territorio y que las instituciones y los mercados puedan funcionar sin estar sometidos al poder de estructuras criminales. Para alcanzar ese objetivo se requiere recuperar capacidades, integrar inteligencia y tecnología, perseguir las finanzas ilícitas, fortalecer la justicia, asegurar el control territorial y profundizar la cooperación con los países que comparten estas amenazas.

Este documento constituye una contribución valiosa a esa agenda y al debate que Colombia debe dar sobre el futuro de su política de seguridad y el papel que puede desempeñar nuevamente en la construcción de un hemisferio más seguro.

Carlos Augusto Chacón Monsalve
Director ejecutivo ICP

RESUMEN EJECUTIVO

Desde que asumió el poder en agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella ha convertido la lucha contra el crimen organizado y el comercio ilícito en una de las principales prioridades de seguridad nacional, ante el rechazo de los colombianos a la creciente violencia y criminalidad en su país. De manera similar, en los últimos años otros gobiernos latinoamericanos han tenido que hacer frente al aumento de la delincuencia en sus países. Las amenazas hemisféricas son reales y van en aumento, mientras delincuentes y redes que representan amenazas actúan con agilidad para desestabilizar la región, explotar las debilidades de la gobernanza y aprovechar las vulnerabilidades fronterizas para obtener ingresos de decenas de miles de millones de dólares. Tanto en Colombia como en otros países de la región, el crimen organizado y las redes de tráfico ilícito se están infiltrando en las instituciones de gobierno y penetrando los mercados para acumular más poder y riqueza.

A partir de la experiencia adquirida con grandes esfuerzos al enfrentar la narcocorrupción y los carteles de Medellín y Cali, Colombia debería volver a ejercer un liderazgo regional tangible, junto con Estados Unidos y otros socios comprometidos, en la lucha contra el narcoterrorismo y las amenazas transfronterizas. Sin embargo, el desafío actual es más complejo e interconectado, pues el crimen organizado transnacional, las organizaciones designadas como terroristas, las redes de comercio ilícito, los facilitadores corruptos y los lavadores de activos aprovechan cada vez más rutas de tráfico, infraestructura logística, canales financieros y vulnerabilidades fronterizas que se superponen. Colombia puede contribuir a liderar una nueva etapa de cooperación regional basada en el intercambio de inteligencia, las investigaciones y operaciones conjuntas, la desarticulación de las finanzas criminales y la acción coordinada contra estas amenazas interconectadas.

El aumento de la criminalidad y la inseguridad en Colombia

Durante la última década, Colombia ha tenido dificultades para contener la violencia tanto en las ciudades como en las zonas rurales, mientras bandas dedicadas al narcotráfico y grupos rebeldes se disputaban los territorios abandonados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, tras su acuerdo de paz con el gobierno en 2016. Lamentablemente, la paz nunca se consolidó en Colombia y el terror vuelve a imperar. En 2025, el país registró aproximadamente 15.000 homicidios, la cifra más alta en una década, y elevados niveles de secuestro. Este mes, el nuevo gobierno de Colombia informó a las Naciones Unidas que más de 132.000 personas habían sido asesinadas desde el acuerdo de paz de 2016. Las cárceles están hacinadas y los grupos armados han aumentado su tamaño a más del doble, mientras amplían su control sobre espacios sin presencia efectiva del Estado y sobre las economías ilícitas del país, incluidos los corredores del narcotráfico y, cada vez más, la extracción ilícita de oro.

En regiones como el Catatumbo, un conflicto sangriento entre grupos armados rivales, entre ellos exintegrantes de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, ha desplazado a numerosas comunidades y aumentado la inseguridad. Otras zonas críticas de Colombia, como la ciudad costera de Santa Marta, también están contribuyendo a la expansión de un ecosistema criminal dentro del país y en los países vecinos, aprovechado por las redes transfronterizas de tráfico ilícito.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se estima que Colombia es responsable de entre el 40 % y el 50 % de la oferta mundial de cocaína, en un contexto en el que tanto la oferta como la demanda alcanzan máximos históricos. De hecho, Colombia enfrenta una economía criminal fragmentada que genera más de 15.000 millones de dólares anuales, lo que convierte a la cocaína en uno de los principales productos de exportación no energéticos del país. Aunque Ecuador no es un gran productor de cocaína, se ha convertido en una autopista para su tráfico y en uno de los principales centros de exportación, con una economía dolarizada. El cultivo de hoja de coca también ha aumentado en Perú y Centroamérica.

Además del uso de puertos, buques y rutas marítimas, cientos de pistas de aterrizaje clandestinas, incluidas las de Venezuela y Perú, facilitan la distribución mundial. La cocaína es una mercancía de alto valor internacional cuyo tráfico reporta enormes ganancias al ELN, las FARC, el cartel del Clan del Golfo y otras redes criminales como el Tren de Aragua, especialmente a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela. Entre las demás actividades delictivas se encuentran la extorsión, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, el comercio ilegal de armas, bebidas alcohólicas y productos de tabaco, los productos falsificados y los delitos

ambientales. El comercio ilegal de oro se ha convertido en otra fuente lucrativa de ingresos para las redes criminales en Colombia, Venezuela y la cuenca amazónica.

En América Latina y el Caribe, las redes criminales, los facilitadores y colaboradores corruptos y los lavadores de activos están diversificando sus actividades y orientándose hacia mercados ilícitos para obtener mayores ingresos, debido a los bajos riesgos y las altas ganancias que ofrece el comercio ilícito. Desde Ecuador y Brasil hasta Haití y Honduras, una ola convergente de criminalidad y corrupción está provocando mayor inseguridad e inestabilidad, financiadas con los ingresos del comercio ilícito. En este proceso, los gobiernos pierden valiosos recursos a causa de las prácticas comerciales ilegales, la evasión delictiva de los controles fronterizos y las operaciones transfronterizas de contrabando y tráfico ilícito.

La implicación estratégica es que Colombia ya no puede enfrentar estas amenazas producto por producto ni entidad por entidad. El tráfico de cocaína, la minería ilegal, el comercio ilícito de tabaco, el tráfico de armas, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la falsificación y los delitos financieros asociados pueden involucrar a distintos actores, pero con frecuencia aprovechan las mismas vulnerabilidades fronterizas, sistemas de transporte, facilitadores corruptos, servicios logísticos y canales de lavado de activos. Esta convergencia exige una respuesta igualmente integrada de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Amenazas hemisféricas en un mundo de convergencia criminal

Entre las nuevas tendencias del crimen transnacional en la región se encuentra una amplia variedad de bienes ilícitos y de contrabando que inundan las economías, ya sea producidos ilegalmente dentro del país o introducidos a través de puertos con controles de seguridad deficientes o a través de las fronteras desde centros de comercio ilícito de zonas vecinas. La creciente demanda de precursores químicos y drogas sintéticas está ampliando los mercados negros, en los que también se comercializan grandes volúmenes de cigarrillos ilícitos, productos electrónicos y prendas de vestir falsificados, medicamentos y productos farmacéuticos falsificados, oro y minerales críticos saqueados, fauna silvestre en peligro de extinción capturada ilegalmente y otros bienes ambientalmente sensibles. Las redes criminales suelen utilizar las mismas cadenas de suministro, infraestructura logística y proveedores de servicios ilícitos para movilizar mercancías ilícitas —incluidas cocaína, oro extraído ilegalmente, falsificaciones y armas— y dinero sucio entre distintas economías ilícitas.

El desafío central es la convergencia criminal: mercados ilícitos que pueden involucrar a distintos actores se entrecruzan cada vez más a través de rutas, infraestructura logística, facilitadores, canales financieros y vulnerabilidades de gobernanza compartidos. Esto es lo que buscamos demostrar mediante la alianza de ICAIE con RADOC en nuestros proyectos Illicit Shadows.

¡Todo está conectado!

Los actores extrarregionales, incluidos los procedentes de Albania, los Balcanes, China, Italia, Turquía y Rusia, también están formando alianzas con sus contrapartes criminales latinoamericanas. La corrupción y el lavado de activos proliferan en estas economías criminalizadas en expansión y en los centros de comercio ilícito de América del Sur. Las redes criminales y otros actores maliciosos siguen aprovechando las vulnerabilidades de algunas zonas francas (FTZ, por sus siglas en inglés) y de puertos como Guayaquil, en Ecuador; Chancay, en Perú; y Santos, Itaqui y Belém, en Brasil, para ampliar las rutas de comercio ilegal en la región.

Una de las crecientes preocupaciones en Colombia y las Américas es que las redes criminales y las élites gobernantes cómplices han propiciado un entorno en el que estos actores ilícitos violentos se han infiltrado en las instituciones gubernamentales y han penetrado sectores económicos para ejercer mayor poder y acumular enormes riquezas. Su influencia corruptora conjunta debilita la democracia, el sistema internacional basado en reglas y la integridad de los mercados.

El comercio ilícito corroe el Estado de derecho y socava el clima de inversión, el comercio legítimo y la competitividad económica de un país. También desincentiva la innovación, pues ingresan a los mercados productos baratos y peligrosos que no cumplen las normas, fabricados en condiciones insalubres, que deterioran el valor reputacional de los productos auténticos.

Cuando se ponen en riesgo o se comprometen las buenas prácticas de gobierno, la actuación policial para hacer cumplir la ley y la supervisión regulatoria, se vuelve más difícil sostener la democracia y se permite que la impunidad sustituya al Estado de derecho.

El desafío actual en muchos países latinoamericanos es que se han convertido en centros atractivos para la convergencia de amenazas, que facilitan el arbitraje transfronterizo de bienes ilícitos y funcionan como mercados de bajo riesgo y alta rentabilidad en los que los delincuentes se lucran del comercio ilícito. La creciente complejidad y rápida expansión de estos mercados han llevado a dichos países a un punto crítico. Si no se implementan de manera sostenible reformas significativas en inteligencia, aplicación de la ley y control financiero, América Latina corre el riesgo de que más Estados y territorios subnacionales sean capturados o comprometidos progresivamente por las redes criminales. Se trata de verdaderas amenazas existenciales para las instituciones democráticas.

El ejemplo de Ecuador durante los últimos cinco años, con un fuerte aumento de los homicidios, la llegada de organizaciones criminales transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) extrarregionales y la violencia extrema entre grupos que buscan controlar puertos, territorios clave y cárceles, ofrece un caso dramático de cómo un país puede colapsar institucionalmente si estos desafíos no se enfrentan de forma directa, contundente y rápida. El 20 de agosto de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a numerosas redes criminales con base en Ecuador, entre ellas Los Choneros y Los Lobos, por narcotráfico y narcoterrorismo. Estos grupos también se asocian con otras organizaciones designadas como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El entorno ilícito de Ecuador demuestra con claridad cómo convergen las alianzas criminales y cómo sus extorsiones y otras actividades financian el caos, la violencia y la inseguridad.

Para Colombia, la experiencia de Ecuador es una advertencia de que la convergencia criminal puede pasar rápidamente de ser un desafío para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a convertirse en una crisis más amplia de seguridad nacional y gobernanza, cuando las redes criminales obtienen el control de territorios estratégicos, puertos, cárceles, canales financieros y sectores económicos legítimos.

Brasil, Chile, Uruguay y otros países de América del Sur también enfrentan un riesgo muy real de entrar en una espiral de deterioro debido al crimen organizado y a redes que representan amenazas similares a las de Ecuador.

En Chile, los líderes de los sectores público y privado reconocen que el crimen organizado transnacional y sus enormes economías ilícitas representan una amenaza existencial para la nación. El presidente chileno, José Antonio Kast, ha puesto en marcha su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) para enfrentar con firmeza estas nuevas amenazas criminales y de seguridad, que evolucionan rápidamente y afectan al país y a la región. El presidente Kast también ha llamado a fortalecer la cooperación regional para combatir el crimen transnacional mediante el intercambio de información entre servicios de inteligencia, fuerzas policiales y fiscalías de países sudamericanos comprometidos, incluidos aquellos que combaten el comercio ilícito y los flujos financieros ilícitos.

La Amazonía brasileña también está experimentando una explosión de la criminalidad y de la ausencia de autoridad, con un aumento de la extracción de madera, la extracción ilegal de oro y el lavado de activos asociado a las transacciones del narcotráfico. El Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) han expandido sus operaciones más allá de São

Paulo y Río de Janeiro y han establecido alianzas con la 'Ndrangheta, la violenta organización mafiosa italiana.

De hecho, la extracción ilegal de oro es tan rentable en el país que los «sistemas» también están obteniendo grandes ganancias. Además del PCC y el CV, grupos criminales y grupos armados narcoterroristas de todos los estados amazónicos vecinos están lucrándose con el comercio de oro ilegal. En busca de nuevas riquezas, aprovechando las fronteras porosas y el soborno, una confluencia de rutas ilícitas permite mezclar y lavar las ganancias del narcotráfico con las derivadas de la extracción ilegal de oro.

Los delincuentes y otros actores maliciosos utilizan el blanqueo de oro para movilizar ganancias ilícitas mediante diversos esquemas de fraude comercial y aduanero, incluido el uso de certificados de origen fraudulentos. El oro extraído ilegalmente también puede blanquearse mediante plantas de procesamiento que trabajan con intermediarios que elaboran documentos de compra fraudulentos, o mediante la adquisición de participaciones en minas de oro y el uso de las cuentas bancarias de empresas auríferas.

El oro extraído ilegalmente se mueve en todas las direcciones a través de numerosas rutas de tráfico y contrabando, lo que lo convierte en uno de los instrumentos más eficaces de convergencia criminal en la región.

Este es el tema de nuestra próxima investigación de Illicit Shadows, LLC, *Oro ilícito: la carrera por lucrarse con las sombras criminales de El Dorado*. La película, actualmente en producción, sigue una sola materia prima desde las zonas auríferas colombianas y a través de la cuenca amazónica, desde los lechos de los ríos, donde los grupos armados cobran a cada cuadrilla que excava, hasta las refinerías y los mercados de consumo que absorben su producción. Ninguna prueba forense puede establecer dónde se extrajo el oro de un lingote, de modo que, a diferencia de la cocaína, que debe ocultarse en cada etapa, el oro solo necesita blanquearse una vez, tras lo cual cada intermediario posterior de la cadena puede realizar transacciones de buena fe. Ese único hecho técnico explica por qué los grupos armados en Colombia obtienen ahora más ingresos del oro que de la cocaína u otros productos de contrabando, y por qué el PCC y el Comando Vermelho han incursionado en territorios e industrias que nunca antes habían controlado.

Como muchas otras redes criminales, el PCC y el CV están diversificando sus portafolios ilícitos y penetrando industrias legales. Por ejemplo, en agosto de 2025, las autoridades brasileñas lanzaron la Operação Carbono Oculto («Carbono Oculto») para investigar un esquema de lavado de activos del PCC por miles de millones de dólares que involucraba al sector de los combustibles. Las investigaciones y acciones de las autoridades relacionadas con este caso han tenido como objetivo a firmas de inversión y empresas de tecnología financiera. El caso puso de manifiesto cómo el PCC y el CV han diversificado sus actividades y se han insertado en

importantes sectores de la economía brasileña, como la energía, la logística, la construcción y las finanzas. Los fiscales señalaron que el PCC controlaba más de 1.000 estaciones de servicio que generaban 52.000 millones de reales brasileños; operaba plataformas de tecnología financiera sin licencia por 46.000 millones de reales; y administraba 40 fondos de inversión por 30.000 millones de reales, que incluían plantas de etanol, una terminal portuaria y una flota de camiones con cobertura nacional.

Argentina y Uruguay también han registrado un aumento de la criminalidad en los últimos años, pues sus puertos, conectados por la hidrovía Paraná-Paraguay, controlada por redes criminales de contrabando, han servido como puntos de tránsito de cocaína y otros productos de contrabando hacia los mercados internacionales. Las fronteras de ambos países son bastante porosas y sus organismos encargados de hacer cumplir la ley carecen de recursos suficientes. En muchos casos, la intensificación de los esfuerzos contra el crimen en otras partes de la región —el «efecto globo»— ha convertido a Guyana y Surinam en nuevos corredores ilícitos para drogas y mercancías ilegales en Sudamérica. Allí, las redes criminales han expandido las rutas de tráfico y contrabando aprovechando la debilidad de los controles fronterizos, las pistas de aterrizaje remotas y las redes fluviales de la cuenca amazónica. Numerosos informes recientes también han destacado cómo el aumento del tráfico de cocaína en Europa está relacionado con la creciente presencia de grupos latinoamericanos designados como narcoterroristas, facilitada por alianzas con mafias euroasiáticas.

Por tanto, no sorprende que los carteles mexicanos y otras redes criminales externas estén invirtiendo fuertemente en diversificar sus actividades hacia Colombia, Ecuador y la Amazonía, y en expandir su presencia ilícita por Sudamérica mediante operaciones conjuntas de narcotráfico y extracción ilegal de oro en la región. Según un informe de julio de 2025 de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), la organización criminal más poderosa de México ha extendido sus tentáculos hacia países como Bolivia, Perú y Colombia para seguir llenando sus arcas. La ONG estima que, desde 2019 hasta el año en curso, las ganancias del cartel CJNG provenientes únicamente del tráfico de mercurio —una sustancia considerada una de las diez sustancias químicas más letales del mundo y necesaria para las actividades de extracción ilegal de oro— están contribuyendo a financiar una fiebre del oro ilícito valorada en al menos USD 8.000 millones.

Rodeada de importantes mercados ilícitos y peligrosas redes criminales, Colombia sigue viendo debilitada su seguridad nacional por las actividades ilícitas de carteles de la droga, grupos armados designados como terroristas, redes de lavado de activos y otros actores maliciosos que convergen dentro del país para desestabilizar su economía nacional y sus instituciones de gobierno mediante la criminalidad y la corrupción.

Este entorno de amenazas hace que Colombia sea, a la vez, vulnerable y estratégicamente indispensable. Sus fronteras, puertos, sistema financiero, corredores de transporte y proximidad a varias de las principales economías ilícitas la sitúan en la intersección de los flujos criminales regionales. Pero Colombia también cuenta con décadas de experiencia institucional, capacidades de inteligencia, alianzas internacionales y lecciones operacionales que pueden convertirla en un centro de gravedad regional para combatir estas redes.

La realidad actual en Colombia y el resto de las Américas es que las TCO y las pandillas violentas no solo están expandiendo sus imperios del narcotráfico, sino que también están diversificando sistemáticamente sus negocios ilícitos hacia el tráfico y el contrabando de bienes culturales robados, oro y minerales críticos, tabaco y alcohol ilegales, armas, productos falsificados y otras mercancías ilícitas y de contrabando, así como hacia la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

La proliferación de redes criminales en la región, junto con la convergencia de sus actividades ilegales transfronterizas, amenaza nuestra seguridad colectiva, especialmente porque muchas de estas TCO y redes ilícitas cuentan con abundantes armas y recursos. Estos grupos tienen a su disposición un arsenal de equipos de uso militar, drones, tanques blindados y sumergibles, artefactos explosivos improvisados, tecnologías avanzadas y sofisticados sistemas de comunicaciones cifradas que permiten el anonimato y las operaciones clandestinas.

Fortalecer la cooperación regional contra el narcoterrorismo

En el actual panorama de seguridad hemisférica, hemos visto la determinación de Estados Unidos, mediante campañas tanto contra el crimen como militares, de combatir el narcoterrorismo y las actividades del crimen organizado aliado con las élites del poder en la región, como se evidenció más recientemente en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Al implementar la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 (NSS, por sus siglas en inglés), Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos transfronterizos en las Américas para combatir con mayor firmeza a las TCO designadas y a las redes que representan amenazas, y está convocando a socios comprometidos a fortalecer la cooperación y la coordinación frente a las amenazas transfronterizas a la seguridad.

Al igual que Venezuela, otros países también están siendo examinados por Estados Unidos desde una nueva perspectiva para combatir el crimen organizado y los delitos de tráfico ilícito transfronterizo. A otros mercados del hemisferio se les está exigiendo una mayor rendición de cuentas y se

está prestando una renovada atención a la lucha contra la convergencia de amenazas criminales que actualmente afecta a todos los países del hemisferio occidental y corrompe sus estructuras de gobierno.

Por eso, en los últimos meses, el presidente de la Espriella se ha acercado a Estados Unidos para encontrar puntos de acuerdo que permitan combatir las amenazas criminales compartidas. El día de su posesión, Washington se comprometió a aportar un paquete de ayuda de USD 1.000 millones para apoyar las operaciones de seguridad y de lucha contra el narcotráfico. Al asumir el cargo, de la Espriella prometió «derrotar implacablemente al narcoterrorismo». También se ha comprometido a recibir tropas estadounidenses en Colombia para apoyar operaciones conjuntas en las selvas amazónicas destinadas a destruir laboratorios clandestinos de cocaína.

El 8 de septiembre de 2026, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, se reunió con el presidente de la Espriella para relanzar la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. Rubio y de la Espriella suscribieron memorandos de entendimiento centrados en la cooperación estratégica en seguridad, el comercio bilateral y la cooperación económica, los minerales críticos y la energía nuclear.

En materia de políticas contra el narcotráfico y el crimen, Colombia y Estados Unidos se comprometieron conjuntamente a erradicar la cocaína y desmantelar las organizaciones de tráfico, entre ellas las designadas como organizaciones terroristas y narcoterroristas. También acordaron fortalecer el intercambio de inteligencia y las operaciones para frenar la producción y el tráfico de cocaína por parte de los carteles de la droga y de estructuras criminales violentas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Clan del Golfo, que operan en las regiones montañosas de Colombia, Venezuela y a lo largo de los Andes.

La oportunidad de Colombia, por tanto, va más allá de reconstruir la cooperación bilateral contra el narcotráfico con Washington. Bogotá puede utilizar esta alianza renovada como una plataforma de liderazgo regional que conecte a gobiernos con capacidad de acción, organismos encargados de hacer cumplir la ley, servicios de inteligencia, fiscalías, autoridades aduaneras y unidades de inteligencia financiera en torno a amenazas transfronterizas comunes. El valor de Colombia radica no solo en la ayuda que recibe, sino también en la experiencia operacional y las capacidades regionales que puede aportar.

Dominio de espectro completo: del intercambio de inteligencia a la desarticulación de redes

¿Puede entonces Colombia aprovechar esta nueva alianza estratégica con Estados Unidos y ejercer un mayor liderazgo regional para el resto de América Latina, mientras otros países intentan salir de la violencia criminal que genera caos e inseguridad? ¿Cómo pueden los gobiernos construir marcos de resiliencia y seguridad más sólidos en todo el hemisferio occidental?

Como exdiplomático y exfuncionario de seguridad nacional de Estados Unidos, conozco de primera mano la importancia decisiva del liderazgo colombiano para ayudar a Estados Unidos a revertir el avance de los delitos de tráfico ilícito en la región, incluso a través del Plan Colombia.

Recuerdo con afecto mi encuentro con el general Óscar Naranjo, de la Policía Nacional de Colombia, en una conferencia entre Estados Unidos y Colombia sobre cómo combatir las rutas ilícitas mediante unidades de investigación criminal transnacional (TCIU, por sus siglas en inglés) y alianzas público-privadas. Las TCIU se crearon para identificar, desarticular, desmantelar y judicializar todo el espectro de la criminalidad, incluidos el narcotráfico, la narcocorrupción, el comercio ilícito, el lavado de activos y el terrorismo. En una intervención principal en Cartagena, en 2011, destaqué la distinguida trayectoria del general Naranjo en la lucha contra el crimen transnacional, incluidos los poderosos carteles de Medellín y Cali y capos de la droga como Pablo Escobar.

La lección no consiste en recrear el Plan Colombia exactamente como existió, sino en adaptar sus principios de compromiso político sostenido, operaciones orientadas por inteligencia, fortalecimiento de capacidades institucionales, alianzas internacionales y desarticulación de redes a un entorno de amenazas fundamentalmente distinto. Los adversarios actuales están más diversificados, cuentan con mayores capacidades tecnológicas, son más sofisticados financieramente y tienen un carácter más transnacional. Por tanto, la próxima generación de líderes colombianos debe actuar contra ecosistemas criminales completos, en lugar de concentrarse en carteles o mercancías específicos.

Una forma práctica de hacerlo es organizar la cooperación regional en torno a corredores prioritarios del comercio ilícito y ecosistemas criminales. Colombia y sus socios deben identificar dónde convergen los narcóticos, el oro extraído ilegalmente, el tabaco ilícito, las armas, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, los productos falsificados y los flujos financieros ilícitos, a través de pasos fronterizos, puertos, aeropuertos, centros logísticos y centros financieros. Ese mapeo puede identificar los nodos donde la coordinación de la inteligencia, la actuación de las autoridades, la

investigación financiera y la recuperación de activos puede producir la mayor afectación en múltiples mercados ilícitos.

Mientras Colombia intensifica una nueva lucha contra las redes de tráfico ilícito que sostienen una economía ilegal de miles de millones de dólares en el país y en las Américas, confío en que el nuevo gobierno evalúe los efectos del crimen organizado y del comercio ilícito sobre su seguridad nacional desde una perspectiva centrada en la convergencia criminal y el narcoterrorismo. La realidad es que las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otros grupos criminales transnacionales colombianos financian su infraestructura con ingresos provenientes no solo del cultivo de coca y la producción de cocaína, sino también de la extorsión y de la venta ilegal de petróleo, oro, cigarrillos y otros productos de contrabando. También han establecido alianzas con los carteles mexicanos, el PCC y otros grupos criminales transnacionales.

Además, reconocer los peligros actuales y las tendencias de convergencia criminal es importante para reconstituir las instituciones de seguridad y restablecer la paz en los espacios criminalizados, de manera que la acción del Estado sea creíble, transparente, sujeta a rendición de cuentas y legítima.

Utilizar los instrumentos del poder nacional y las alianzas estratégicas puede ser decisivo, especialmente mediante el intercambio rápido de información y la inteligencia que permita actuar contra las redes criminales y las organizaciones designadas como terroristas extranjeras (FTO).

El 20 de enero de 2025, en virtud de la Orden Ejecutiva 14157, Estados Unidos designó a varias organizaciones criminales transnacionales (TCO) y pandillas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) o terroristas globales especialmente designados (SDGT, por sus siglas en inglés), lo que permite aplicar estrictas sanciones financieras y jurídicas.

Estados Unidos ha designado como FTO a 21 redes criminales que han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental, desestabilizando países de gran importancia para los intereses nacionales estadounidenses e inundando Estados Unidos de drogas letales, criminales violentos y pandillas despiadadas. Los primeros carteles mexicanos designados como FTO y SDGT en virtud de la Orden Ejecutiva 14157 fueron el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste (antes Los Zetas), el Cartel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos. También fueron incluidos la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua (TdA).

El 28 de mayo de 2026, Estados Unidos también designó al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC) como FTO y SDGT, con efecto a partir del 5 de junio de 2026. Ambas redes criminales han organizado ataques brutales contra policías, funcionarios públicos y civiles

brasileños, y su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de Brasil. Otros grupos designados incluyen al Clan del Golfo (Colombia); el Cartel de los Soles (Venezuela); Los Lobos, Los Choneros, los Chone Killers y Los Tiguerones (Ecuador); las pandillas Viv Ansanm y Gran Grif (Haití); Barrio 18 (El Salvador); y el Cartel de Juárez y Los Viagras (México).

La Célula de Fusión de Inteligencia de la Embajada (EIFC, por sus siglas en inglés) en Bogotá es un excelente modelo que puede replicarse para combatir el floreciente comercio ilícito en Sudamérica e impedir que las FTO trasladen drogas, mercancías ilícitas y otros productos de contrabando hacia Estados Unidos y dentro de la región.

Un centro regional de fusión de inteligencia puede cruzar distintas capas de información para localizar nodos críticos, zonas de riesgo y rutas de tráfico ilícito a lo largo de las cadenas de suministro del hemisferio, incluidos los puntos de origen, tránsito y transbordo, así como los mercados de destino. Las inversiones en tecnologías de vanguardia y en sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de espectro completo pueden fortalecer las capacidades de intercambio de inteligencia al proporcionar información crítica en tiempo real sobre laboratorios de cocaína, zonas de producción, rutas de tráfico y puntos de salida. Estas capacidades pueden contribuir a identificar y actuar contra los principales líderes y nodos operativos de las organizaciones designadas como terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), permitiendo que las fuerzas de seguridad de Colombia y Estados Unidos desarrollen operaciones conjuntas y coordinadas para desarticular y desmantelar las redes criminales.

Un mecanismo de esta naturaleza no debería convertirse en otro repositorio de información. Su valor debe medirse por los resultados operacionales: inteligencia intercambiada que permita actuar, redes prioritarias identificadas, investigaciones conjuntas o paralelas iniciadas, cuentas financieras y beneficiarios finales identificados, activos congelados o incautados, operaciones logísticas ilícitas interrumpidas y facilitadores de alto valor judicializados.

Colombia podría complementar esta capacidad mediante la designación de puntos de contacto operacionales con los gobiernos participantes, de modo que la inteligencia sobre una red o un corredor prioritario circule rápidamente entre la policía, las aduanas, las fiscalías, las unidades de inteligencia financiera y otras autoridades competentes.

Actuar siempre es mejor que reaccionar.

En el plano de la política estratégica, Estados Unidos debería trabajar de manera constructiva con otros líderes de países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú para que hagan más. El objetivo es lograr que los líderes decididos de la región adopten medidas más contundentes, como lo ha hecho Colombia, para judicializar a narcoterroristas, delincuentes,

falsificadores, actores corruptos con capacidad de influencia, lavadores de activos y financiadores del terrorismo que actualmente prosperan sin freno, debilitando un marco sólido de beneficio mutuo en materia de comercio bilateral, inversión, integridad de los mercados y seguridad.

La EIFC también debería apoyarse en los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSTF, por sus siglas en inglés) y en el Centro Nacional de Coordinación de los Derechos de Propiedad Intelectual (IPR Center) para proporcionar asistencia técnica, intercambio de inteligencia y capacidades que permitan actuar contra los nodos de mando, desarticular la infraestructura operativa e interrumpir las finanzas ilícitas de las redes criminales de tráfico y contrabando, de otras redes que representan amenazas y de sus facilitadores y colaboradores en las Américas. El apoyo adicional de Estados Unidos en investigación e inteligencia, a través de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Comando Sur del Departamento de Guerra y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, también ayudará a los actores de la región a consolidar alianzas regionales contra el crimen centradas en la disuasión.

Una encuesta reciente de Latinobarómetro encontró que la percepción de la influencia global de China en América Latina está aumentando en relación con la de Estados Unidos, lo que subraya la importancia de examinar las implicaciones para la seguridad de la creciente presencia económica china en la región. La profundización de las relaciones comerciales con China no debería producirse a costa de la transparencia, la integridad de los mercados o las salvaguardas de seguridad nacional. Preocupan especialmente las vulnerabilidades relacionadas con las redes chinas de lavado de activos, las cadenas de suministro de productos falsificados, el lavado de activos basado en el comercio, las estructuras societarias opacas y la explotación criminal del comercio y la infraestructura legales. Ante la expansión regional de la influencia de China, entre otros medios a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), y como subraya la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, Estados Unidos deja claro, mediante el moderno «Corolario Trump» a la Doctrina Monroe, que rechazará la dominación externa y dejará de ceder espacio a la influencia de actores externos en el hemisferio occidental.

También suscitan una preocupación creciente las inversiones chinas, así como la propiedad o el control operativo por parte de China de infraestructura crítica, puertos clave e instalaciones portuarias en las Américas. Mediante una acción diplomática más firme, el secretario Rubio logró alentar a Panamá a reducir el predominio y la influencia de China en dos puertos clave del Canal de Panamá y a fortalecer la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Panamá.

Además, dada la magnitud del lavado de activos realizado por las redes chinas de lavado de activos (CMLN, por sus siglas en inglés), Estados Unidos, Colombia y otros gobiernos latinoamericanos deberían impulsar activamente más investigaciones conjuntas y casos transfronterizos contra las tríadas chinas, en su condición de facilitadoras que prestan apoyo material a narcoterroristas designados, para así sacar a la luz su riqueza ilícita. En estos casos se puede recurrir a las Unidades de Transparencia Comercial (TTU, por sus siglas en inglés) de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), especialmente en relación con el lavado de activos basado en el comercio (TBML, por sus siglas en inglés), para combatir la evasión de aranceles y el fraude en el pago de derechos aduaneros, el fraude comercial, el transbordo ilegal, el etiquetado incorrecto, las violaciones de las normas de origen y el fraude documental en las zonas francas (FTZ). Estas vulnerabilidades refuerzan la necesidad de una mayor transparencia sobre los beneficiarios finales, controles aduaneros más sólidos, salvaguardas contra el lavado de activos e investigaciones financieras coordinadas en toda la región.

Ningún país puede desmantelar por sí solo las redes criminales transnacionales.

Por ello, Colombia debería contribuir a construir una coalición de gobiernos comprometidos y dispuestos a pasar de las declaraciones a una cooperación operacional sostenida. El Escudo de las Américas ofrece un posible marco político para esa cooperación, pero su eficacia dependerá de traducir el compromiso político en intercambio de inteligencia, investigaciones coordinadas, sanciones armonizadas, interrupción de los flujos financieros y recuperación de activos, cooperación fronteriza y portuaria, y operaciones conjuntas contra redes y corredores de tráfico prioritarios. Esa cooperación puede ayudar a que el hemisferio occidental sea más seguro y resiliente frente a las amenazas compartidas que representan los carteles de la droga, las TCO y otras redes transnacionales que amenazan la seguridad.

◀ CONCLUSIÓN

Durante décadas, Colombia ha sido uno de los aliados más importantes y constantes de Estados Unidos en América Latina, un socio estratégico y confiable en la lucha contra las drogas, la seguridad regional, el combate al terrorismo y la democracia. Durante este período, la relación de seguridad entre Estados Unidos y Colombia ha recibido, en términos generales, un amplio respaldo bipartidista en el Congreso estadounidense.

El presidente de la Espriella tiene la oportunidad de afrontar los desafíos económicos y de seguridad de Colombia mediante el desmantelamiento del ecosistema de criminalidad y corrupción alimentado por el comercio ilícito. Esto incluye fortalecer a los organismos encargados de hacer cumplir la ley mediante inversiones estratégicas contra el crimen y tecnologías avanzadas capaces de contrarrestar a los carteles y a las organizaciones criminales armadas, como el ELN. Reconstruir la capacidad policial, cerrar la brecha de coordinación entre las autoridades nacionales y locales y asumir la prevención como una estrategia central, en lugar de relegarla a una consideración secundaria, son tareas igualmente importantes.

Por lo tanto, Colombia debe perseguir tres objetivos que se refuerzan mutuamente.

Primero, debe abordar la convergencia entre el crimen organizado, el comercio ilícito, las organizaciones designadas como terroristas, la corrupción y las finanzas ilícitas como un desafío integral de seguridad nacional, en lugar de tratarla como un conjunto de delitos separados.

Segundo, a partir de las lecciones de su lucha anterior contra carteles poderosos, Colombia debería volver a ejercer un liderazgo regional mediante instituciones más sólidas, acciones de aplicación de la ley orientadas por inteligencia, investigaciones financieras y operaciones transfronterizas coordinadas.

Tercero, Bogotá debería contribuir a construir una coalición de gobiernos comprometidos, capaces de traducir la cooperación política regional, incluso a través de iniciativas como el Escudo de las Américas, en una acción operacional sostenida contra las redes, los facilitadores, los flujos financieros y la infraestructura que sostienen las economías ilícitas.

El éxito también requerirá que los actores gubernamentales y del mercado de toda la región adopten enfoques que involucren al conjunto de la sociedad, respaldados por mecanismos eficaces de cooperación transfronteriza e intercambio de información.

Una coordinación más eficaz y fluida entre sectores puede fortalecer las acciones para desarticular las amenazas convergentes a la seguridad, el

comercio ilícito, la financiación de actores que representan amenazas y el lavado de activos.

El objetivo estratégico no debería limitarse a incautar más drogas, oro extraído ilegalmente, productos falsificados o mercancías de contrabando. Debería consistir en reducir el poder de las redes criminales transnacionales, privándolas sistemáticamente de la riqueza, la infraestructura, la logística, la protección corrupta y los refugios seguros que sostienen sus operaciones. Colombia ya ha enfrentado a organizaciones criminales poderosas. El desafío ahora consiste en aplicar esa experiencia adquirida con tanto esfuerzo a un entorno de amenazas más interconectado y volver a contribuir al liderazgo regional para enfrentarlo.

Con el liderazgo hemisférico de Colombia, podemos garantizar comunidades más seguras y mayores resultados en la lucha actual contra las redes criminales y los grupos narcoterroristas.

David M. Luna es director ejecutivo de la Coalición Internacional contra las Economías Ilícitas (ICAIE) y exdiplomático y exfuncionario de seguridad nacional de Estados Unidos, donde estuvo encargado de fortalecer la cooperación internacional y las alianzas público-privadas para combatir las amenazas derivadas de la convergencia criminal, incluidos los vínculos entre carteles de la droga, organizaciones criminales transnacionales, redes de comercio ilícito, grupos terroristas y la corrupción y el lavado de activos asociados. Luna también es cofundador de la serie documental de investigación Illicit Shadows, que arroja luz sobre las fuerzas oscuras que configuran el submundo criminal global y que recientemente lanzó el nuevo Museo de las Sombras Ilícitas en línea (Museum of Illicit Shadows, MIS).